



S U M A R I O

Tema 52 del programa:

Procedimiento arbitral: observaciones de los gobiernos sobre el proyecto de procedimiento arbitral preparado por la Comisión de Derecho Internacional (*continuación*) 127

Presidente: Sr. Manfred LACHS (Polonia).

TEMA 52 DEL PROGRAMA

Procedimiento arbitral: observaciones de los gobiernos sobre el proyecto de procedimiento arbitral preparado por la Comisión de Derecho Internacional (A/2456, párr. 57, A/2899 y Corr.1 y A/2899/Add.1 y 2, A/CN.4/92,* A/C.6/L.369, A/C.6/L.369/Rev.1) (continuación)

DEBATE GENERAL (continuación)

1. El Sr. PETRZELKA (Checoslovaquia) expresa que ésta es la segunda vez que la Asamblea General se ocupa en el proyecto de procedimiento arbitral preparado por la Comisión de Derecho Internacional (A/2456, párr. 57).
2. Una experiencia de siglos ha demostrado que el arbitraje internacional es la vía más eficaz para el arreglo pacífico de las controversias internacionales, a la vez que un medio excelente para restablecer la confianza internacional y fomentar la colaboración pacífica entre los Estados. Así se explica la importancia que todos los Estados asignan al procedimiento arbitral y el lugar que ocupa en el párrafo 1 del Artículo 33 de la Carta, entre los diversos medios de arreglo pacífico.
3. Conforme a un principio bien reconocido del derecho internacional, el arbitraje tiene que fundarse en el libre consentimiento de las partes; dicho principio se basa por su parte en el pleno y absoluto respeto de la soberanía y los intereses legítimos de los Estados.
4. Durante el octavo período de sesiones de la Asamblea General en la Sexta Comisión (387a. sesión), la delegación checoslovaca expresó que aprobaba la idea del arbitraje internacional, pero señaló que el proyecto de convención redactado por la Comisión de Derecho Internacional contrariaba la esencia misma del arbitraje, en su forma tradicional. Como lo han indicado también otras delegaciones, el proyecto de convención confiere al tribunal arbitral una competencia que excede en mucho los límites fijados por la voluntad de las partes.
5. El proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional exhibe una tendencia a transformar al

* Este documento no ha sido publicado en español hasta la fecha.

tribunal arbitral en una institución colocada por encima de las partes, y capacitada para prescindir de la voluntad de las mismas tal como se expresa en el acuerdo de arbitraje. El orador cita el párrafo 2 del artículo 5, el párrafo 1 del artículo 7, el artículo 11, el párrafo 2 del artículo 12, los artículos 16 y 17 y el párrafo 1 del artículo 20, como disposiciones típicas del proyecto, en las que se pone de manifiesto el deseo de imponer nuevas obligaciones a las partes en procedimientos arbitrales y de modificar en otros respectos la naturaleza intrínseca del arbitraje tal como se la reconoce en el derecho internacional vigente. Se contemplan modificaciones aún más drásticas del procedimiento arbitral en las disposiciones del proyecto que confieren amplias facultades a la Carta Internacional de Justicia o a su Presidente; el orador cita los artículos 2 y 3, el párrafo 2 del artículo 8, el párrafo 2 del artículo 28, y el artículo 31. En efecto, el proyecto subordina los tribunales arbitrales, tanto los ya existentes como los que pueden establecerse en el futuro, a la jurisdicción superior y a la vigilancia de la Corte Internacional de Justicia.

6. La jurisprudencia y el uso internacional han considerado siempre el laudo arbitral como definitivo. Siempre se ha visto en toda controversia relativa a la interpretación o revisión del laudo arbitral, una controversia nueva que deberá resolverse, ya sea por el arbitraje, ya sea por otros medios de arreglo pacífico. Las disposiciones del proyecto se proponen, de manera implícita, transformar el procedimiento arbitral en un procedimiento en el que un tribunal pueda revisar las decisiones de otro, aunque el proyecto no prevea expresamente la posibilidad de apelar.

7. La aprobación de estas disposiciones ampliaría considerablemente la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Tal ampliación, combinada con la jurisdicción obligatoria a que se refiere la cláusula facultativa del párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte, significa un paso más hacia la transformación de la Corte en una autoridad judicial supranacional.

8. Sin embargo, el defecto más grave del proyecto consiste en que algunas de sus disposiciones proceden a reemplazar el acuerdo de las partes por las decisiones del tribunal arbitral. Por ejemplo, los párrafos 2 y 3 del artículo 10 autorizan al tribunal a redactar el compromiso si las partes no pudieren ponerse de acuerdo al respecto. Es inadmisibles que el tribunal arbitral tenga esos poderes cuando las partes en la controversia todavía no hayan llegado a un acuerdo de procedimiento. Los defensores del proyecto han manifestado que con esto se trata de impedir que los Estados signatarios de un acuerdo de arbitraje eludan sus obligaciones cuando surja una controversia. El texto del artículo 10 (párrs. 2 y 3), demuestra claramente que el proyecto tiene un alcance mucho mayor, en cuanto autoriza al tribunal arbitral para redactar un acuerdo de someterse a arbitraje cuando no lo hubiere. El propósito manifiesto del artículo 10 es obligar a los

Estados a aceptar el procedimiento arbitral establecido en el proyecto de convención de la Comisión aun en los casos en que sólo exista un acuerdo en principio de someter las controversias al arbitraje.

9. La objeción más grave que cabe hacer al proyecto es que algunas de sus cláusulas violan el principio de la soberanía nacional; el orador cita las disposiciones del párrafo 3 del artículo 3 que, como algunas otras disposiciones del proyecto, son totalmente inaceptable.

10. Todo el proyecto se caracteriza por su tendencia, antes que a establecer normas detalladas sobre el procedimiento arbitral, a transformar todo arbitraje (pasado o futuro) en una especie de jurisdicción supranacional. No se propone fomentar el arbitraje internacional entre Estados soberanos, sino más bien eliminarlo. Si el proyecto llegara a convertirse en convención internacional, todo Estado que firme un acuerdo de arbitraje se verá pronto privado de toda influencia sobre la composición del tribunal y el procedimiento arbitral; en otras palabras, estará renunciando a su soberanía contra su voluntad. Un proyecto así no concuerda con los principios vigentes del derecho internacional, que sirven de base a la coexistencia pacífica de los Estados. Del debate parece desprenderse que el proyecto, tal como ha sido sometido a la Sexta Comisión, no será aprobado por la Asamblea General.

11. Habrá que modificarlo muchísimo antes de que pueda ser presentado a los Estados para su firma. Por consiguiente, no es apropiado para servir de base a la discusión en una conferencia internacional de plenipotenciarios. La experiencia de las negociaciones internacionales demuestra que una conferencia diplomática no es el medio adecuado para examinar un tratado internacional, a menos que exista un proyecto que los Estados consideren como un punto de partida aceptable para las negociaciones. Es evidente que el proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional no satisface esta condición.

12. A juicio de la delegación de Checoslovaquia, lo mejor que puede hacerse es remitir el proyecto a un pequeño grupo de expertos para que lo examine y revise teniendo en cuenta las observaciones de los gobiernos. El organismo mejor capacitado para hacerlo es la Comisión de Derecho Internacional, y por eso su delegación apoya la sugestión que hiciera el representante del Afganistán en este sentido en la 466a. sesión; la Comisión debe tener presentes no sólo las observaciones escritas de los gobiernos, sino también las declaraciones formuladas por sus representantes en el octavo y décimo período de sesiones de la Asamblea General.

13. La delegación de Checoslovaquia se reserva el derecho de intervenir nuevamente sobre este tema.

14. El Sr. LOPEZ VILLAMIL (Honduras) lamenta que el proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional haya tenido tan poco presentes las observaciones de los gobiernos. A pesar de éstas, en el proyecto conjunto de resolución revisado (A/C.6/L.369/Rev. 1), se propone señalar el proyecto a la atención de los Estados para que lo tengan en cuenta al redactar las disposiciones que hayan de incluirse en tratados y acuerdos en que se prevea el arbitraje.

15. El problema del procedimiento arbitral es el tema más importante del programa de la Comisión. Varios representantes han formulado muchas observaciones adversas al proyecto, por considerar que se aparta del sistema tradicional e introduce un procedimiento que,

si llegara a aplicarse, equivaldría a una sentencia de muerte para el sistema de arbitraje aplicado hasta ahora por los Estados.

16. A menos que se perfeccione notablemente el procedimiento propuesto, la delegación de Honduras votará en contra del proyecto. Como las decisiones de las Naciones Unidas tienen mucha fuerza, hasta sería peligroso abstenerse en una votación referente al proyecto preparado por la Comisión.

17. La estabilidad del derecho internacional descansa sobre la máxima universalmente aceptada *pacta sunt servanda*. El proyecto de procedimiento arbitral infringe esa máxima, en cuanto autoriza la revisión o anulación de un laudo arbitral en razón del descubrimiento de un "hecho nuevo", desconocido para las partes durante el curso del proceso. Tales disposiciones del proyecto vienen a introducir la teoría de la imprevisión o la cláusula *rebus sic stantibus*.

18. Se ha intentado descubrir un origen romano a la cláusula *rebus sic stantibus*, pero los eruditos han demostrado que nunca se la aceptó como regla general del derecho romano. La cláusula fué divulgada a mediados del siglo XVII y en el curso del siglo XVIII por los escritos de los juristas holandeses y alemanes, pero desde entonces ha caído en desuso. Evidentemente, sólo puede adquirir méritos en períodos de inseguridad e inestabilidad. Así, por ejemplo, después de la primera guerra mundial, la teoría de la imprevisión reapareció en el derecho privado. Pero, sea cual fuere el valor de la teoría de la imprevisión en el derecho privado, si se la introduce en el derecho internacional, vendría simplemente a procurar a los Estados el medio de liberarse de sus obligaciones contractuales y de desentenderse de los principios de buena fe y responsabilidad internacional.

19. En lo que toca a la responsabilidad internacional de los Estados, los autores contemporáneos convienen en que un Estado puede ser hecho responsable internacionalmente sólo si se cumplen dos condiciones: que se haya infringido una norma del derecho internacional, y que la infracción sea imputable a dicho Estado. A este respecto, los artículos 1 y 2 y las disposiciones pertinentes del artículo 20 del proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional dan por sentada la responsabilidad de una manera arbitraria y unilateral. El problema de la responsabilidad de un Estado en el caso de la llamada denegación de justicia ha dado lugar en América a una abundante experiencia.

20. El orador se refiere a las disposiciones del Tratado Interamericano de Arbitraje Obligatorio del 29 de enero de 1902 y a los tratados que lo han sucedido. En particular, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas ("Pacto de Bogotá") de 1948, dispone en su artículo VII que:

"Las Altas Partes Contratantes se obligan a no intentar reclamación diplomática para proteger a sus nacionales, ni a iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción internacional, cuando dichos nacionales hayan tenido expedidos los medios para acudir a los tribunales domésticos competentes del Estado respectivo."¹

21. Cláusulas parecidas figuran también en los tratados de arbitraje europeos. Por ejemplo, el Tratado

¹ Unión Panamericana, *Serie sobre Derecho y Tratados*, No. 15, pág. 2.

de Arbitraje firmado el 12 de febrero de 1904 entre Dinamarca y los Países Bajos excluye de su campo de aplicación las controversias entre las partes contratantes relativas a demandas entabladas por un nacional de uno de los Estados en contra de un nacional de otro, para conocer de cuales fueran competentes los tribunales de este último. La convención de arbitraje entre Italia y Dinamarca firmada el 16 de diciembre de 1905, el Tratado General de Arbitraje firmado en La Haya el 16 de octubre de 1907 entre Italia y México, y el Tratado de conciliación y arbitraje firmado el 19 de julio de 1927 entre Bélgica y España, contienen disposiciones análogas.

22. Por lo que se refiere a la posibilidad de revisar los laudos arbitrales, el orador recuerda que la delegación de los Estados Unidos a la Conferencia Internacional de la Paz reunida en La Haya en 1899, sugirió que cualquiera de las partes en una causa ventilada ante un tribunal internacional, debería estar facultada para pedir su revisión por los mismos jueces, si, dentro de un plazo de tres meses a partir de la notificación del laudo, pudiera aportar nuevas pruebas o plantear nuevas cuestiones de derecho que no hubiesen sido falladas en primera instancia. El representante de Rusia, Sr. de Martens, se opuso a ello señalando que el valor fundamental del arbitraje estriba en que, una vez dictado el laudo arbitral, la causa se termina y el laudo no puede ser discutido en ningún caso. Cualquier desviación de esta norma sólo conseguiría aumentar la tirantez internacional y amenazar la paz del mundo.

23. En el nuevo mundo, la tendencia general de la doctrina jurídica y los usos internacionales es favorable a la garantía del cumplimiento de los laudos arbitrales y a la salvaguardia del respeto debido a la autonomía de la voluntad de las partes.

24. Esta tendencia se manifiesta en las reservas hechas por los Estados Unidos de América al firmar el Pacto de Bogotá:

"1. Los Estados Unidos de América no se comprometen, en caso de conflicto en que se consideren parte agraviada, a someter a la Corte Internacional de Justicia toda controversia que no se considere propiamente dentro de la jurisdicción de la Corte.

"2. El planteo por parte de los Estados Unidos de América de cualquier controversia al arbitraje, a diferencia del arreglo judicial, dependerá de la conclusión de un acuerdo especial entre las partes interesadas."²

25. Esta tendencia a considerar el laudo arbitral como definitivo se manifiesta en el proyecto de arbitraje comercial internacional ("Normas de Copenhagen"), redactado por la Asociación de Derecho Internacional en la Conferencia de Copenhagen en 1950; su artículo 19, dice lo siguiente:

"El laudo será definitivo y las partes renuncian a sus derechos a interponer cualquier recurso que no sea irrenunciable."³

26. Como lo han señalado las autoridades en materia jurídica, es imposible determinar de antemano las razones para anular una resolución judicial y es peligroso dejar una materia tan delicada a la discreción

unilateral de la parte que reclame haber sido perjudicada.

27. Mientras no se tomen en consideración las observaciones formuladas por diversos gobiernos respecto de las disposiciones inaceptables del proyecto, y no se examine la totalidad del problema con mayor prolijidad, no debería proponerse el texto preparado por la Comisión de Derecho Internacional como guía para la redacción de acuerdos internacionales de arbitraje.

28. Entre las diversas medidas prácticas que se han propuesto, la delegación de Honduras apoya la indicada por el representante del Reino Unido (462a. sesión), a saber, que se convoque una conferencia internacional de plenipotenciarios.

29. El Sr. CASTAÑEDA (México) manifiesta que su delegación acepta en general la mayoría de los principios que inspiran el proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional. Para asegurar el arreglo de las controversias por medios pacíficos, es necesario crear un mecanismo jurídico que garantice no se deje posteriormente sin efecto la primitiva decisión voluntaria de someterse al arbitraje.

30. México, uno de los pocos países de la América Latina que han ratificado, sin reservas, el Pacto de Bogotá, estima que el compromiso de los Estados de aceptar el arbitraje como institución obligatoria sería un factor conveniente en la evolución del derecho internacional. Por lo tanto, ve con sumo agrado algunas de las disposiciones del proyecto. Sus características más descabales son la inmutabilidad del tribunal arbitral, la limitación del derecho de las partes a remover los árbitros, la inadmisibilidad de que el tribunal pronuncie el *non liquet* y las amplias facultades del tribunal para interpretar el compromiso. Es igualmente digno de elogio que confiera determinadas facultades a la Corte Internacional de Justicia; sin embargo, en la práctica, algunas de esas disposiciones pueden resultar de valor dudoso. Podría encontrarse una solución a este inconveniente en la creación de un procedimiento alternativo, que sería aplicado si la Corte Internacional o su Presidente no actuaran en la forma estipulada. Una posible solución sería la inclusión de disposiciones análogas a las de los artículos XXXIV y XXXV del Pacto de Bogotá.

31. El argumento aducido con mayor frecuencia por los adversarios del proyecto es que se aparta fundamentalmente de los principios tradicionales del arbitraje. Evidentemente, además de codificar algunas normas reconocidas, el proyecto contiene muchos elementos que denotan un progreso, le dan un carácter avanzado y hacen de él un texto *sui generis*. El proyecto atribuye importancia fundamental a la aplicación automática y la índole obligatoria del procedimiento. En este respecto, el sistema propuesto se parece en sus características esenciales al procedimiento judicial. No obstante, el mecanismo propuesto es infinitamente más flexible y menos complejo. Como permite la aplicación de criterios especiales, aun de algunos que no son estrictamente jurídicos y ofrece la posibilidad de designar expertos técnicos como árbitros, el nuevo sistema puede adaptarse fácilmente a problemas que difícilmente serían examinados adecuadamente en un tribunal de derecho. Asimismo, posee las cualidades de estabilidad y fijeza y contiene resguardos contra la evasión, características que no se presentan en el procedimiento arbitral ordinario. En consecuencia, puede decirse que el proyecto suministra en cierto

² *Ibid.*, págs. 12 y 13.

³ Asociación de Derecho Internacional, *Report of the Forty-Fourth Conference held at Copenhagen, 1952* (publicado en Gran Bretaña), pág. 275.

modo un tercer medio para hallar soluciones pacíficas, colocado entre el procedimiento judicial y el arbitraje tradicional.

32. La gran cantidad de elementos de desarrollo progresivo que contiene el proyecto, dice el orador, plantea un problema fundamental considerando deseable — como sostiene su delegación — que esos principios se incorporen al derecho internacional vigente, ¿se acelerará de algún modo ese proceso mediante la firma de una convención obligatoria lo antes posible? La experiencia ha demostrado que la vía de la convención inmediata no es el mejor medio de incorporar al derecho internacional algunos elementos de evolución progresiva, especialmente cuando afectan a la soberanía de un Estado. La ruptura con los principios tradicionales debe efectuarse a un ritmo mucho más lento y más gradual, pero más seguro. Antes de invitar a los Estados a suscribir una convención, la Asamblea General debería aprobar primero los principios generales del proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional, indicando que es conveniente su aplicación por los Estados. Luego, éstos podrían voluntariamente hacer uso de tales principios al recurrir al arbitraje, y la frecuencia con que se utilizaran las normas revelaría si en realidad cuentan con el apoyo general. Después de aplicarse a diferentes circunstancias adquirirán a la larga, fuerza persuasiva y formarán un conjunto de normas susceptibles de codificación.

33. Además, continúa el Sr. Castañeda, la delegación de México estima que, por su índole misma, el proyecto es inadecuado para una convención obligatoria. Esta podría revestir cualquiera de las dos formas siguientes: Primero, podría convertirse en un verdadero tratado general de arbitraje si se reemplazara el párrafo 2 del artículo 1 por alguna disposición análoga a la del artículo 21 del Acta General para el arreglo pacífico de las controversias internacionales (1928) o, a la del artículo II del Pacto de Bogotá, en virtud de las cuales las partes se comprometen a someterse al arbitraje. Pero en ese caso la gran mayoría de los Estados no estará dispuesta a aceptar ese compromiso. Aunque fuese firmado, el tratado correrá probablemente la misma suerte que el Acta General de 1928 (revisada en 1949). Estos tratados generales de arbitraje nunca son viables, salvo entre un pequeño número de signatarios con nexos comunes, como los que forman parte de un acuerdo regional.

34. La segunda forma consistiría en suscribir el proyecto, en su forma actual. En ese caso, los Estados partes no estarán de ningún modo obligados a someter sus controversias al arbitraje; el procedimiento únicamente será obligatorio para los Estados que así lo convengan expresamente en un documento distinto de la convención sobre procedimiento arbitral. Una obligación condicional de esta índole no puede ser lógicamente el objeto de una convención. Todo Estado que llegare a ser parte de semejante instrumento estaría, como lo ha dicho el representante de Cuba, firmando un cheque en blanco. El procedimiento previsto en el proyecto puede ser adecuado en algunas circunstancias y no en otras. Por esa razón, un código de procedimiento arbitral no puede ser concebido sino como modelo o guía para que los Estados lo utilicen cuando por las circunstancias, ese procedimiento sea el más adecuado para resolver una controversia particular.

35. Si el proyecto, en vez de ser recomendado como una convención, fuese presentado solamente como un

conjunto de normas, muchas de las objeciones que se han expuesto perderían su importancia. El texto se vería privado de su característica de aplicación automática en la primera fase del procedimiento, esto es, antes del acuerdo particular entre dos o más Estados, respecto de una controversia concreta, lo cual ha motivado la mayor oposición. Ya no se plantearía la cuestión del efecto retroactivo o de la posible intromisión en la jurisdicción interna. No se presentará el problema de la existencia de una controversia o de si la controversia existente está comprendida en la obligación de recurrir al arbitraje. También desaparecerá la dificultad relativa a la situación de esas normas frente a los acuerdos de arbitraje vigentes.

36. La cuestión que debe resolver la Asamblea General es si desea mantener los nuevos elementos de evolución progresiva incluidos en el proyecto o si prefiere solamente la codificación de los principios tradicionales del arbitraje. Si opta por lo segundo, será mejor limitarse sencillamente a tomar nota del proyecto. De muy poco serviría pedir a la Comisión que codificase principios perfectamente conocidos. Por otra parte, si la mayoría se declarara a favor de mantener los nuevos elementos de evolución progresiva que contiene el proyecto, la Asamblea General tendría que seguir el método más adecuado para obtener su inclusión gradual en el derecho internacional, esto es como una guía no obligatoria, como un acervo de principios que estarían a disposición de los Estados para que éstos tomaran de ahí los que les parecieran convenientes de acuerdo con las circunstancias del caso.

37. En conclusión, la delegación de México coincide con el espíritu del proyecto conjunto de resolución (A/C.6/L.369). Sin embargo, no puede apoyar esa propuesta, primero, porque la Asamblea no debe pedir a los Estados que acepten como modelo un documento que muchos consideran imperfecto. Por otra parte, como el proyecto jamás fué concebido por sus autores como una guía sin carácter obligatorio, el proyecto conjunto de resolución resulta hasta cierto punto contradictorio. Sería preferible presentar a los Estados un documento expresamente preparado para servir de modelo. Tal documento debería contener los mismos principios generales del actual proyecto, con las mejoras que se introduzcan teniendo en cuenta las observaciones de los gobiernos y los comentarios hechos en la Sexta Comisión. Ese documento no constituiría un proyecto de convención sino un conjunto de reglas no obligatorias que la Asamblea podría aprobar como un modelo y que los Estados podrían incluir en los tratados y acuerdos de arbitraje.

38. Tal es el objeto de las enmiendas al proyecto de resolución presentadas conjuntamente por la delegación de México y las delegaciones del Afganistán, los Países Bajos y Yugoslavia (A/C.6/L.370).

39. El Sr. SPASOWSKI (Polonia) deplora que el proyecto de procedimiento arbitral, pese a las observaciones de los gobiernos, no haya sido modificado más a fondo desde 1953.

40. El debate ha demostrado la importancia que se atribuye al arbitraje en las relaciones internacionales. Se le menciona expresamente en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y en múltiples acuerdos bilaterales. Polonia, que recurre frecuentemente al arbitraje en sus relaciones comerciales, reconoce plenamente su importancia tanto para los Estados como para las organizaciones. Sin embargo, el primer requi-

sito previo para su adecuado funcionamiento es el respeto de sus elementos primordiales.

41. La Comisión de Derecho Internacional, al remitir este proyecto a la Asamblea General, recalcó que “no consideró necesario formular reglas detalladas de procedimiento” (A/2456, párr. 14). No obstante, el documento ha sido definido a veces como un “proyecto de convención”. Esto creó un malentendido desde un principio. Si el documento es únicamente una compilación de normas que han de servir de orientación a los Estados, entonces sólo será útil en la medida en que las fórmulas que contiene pueden ser utilizadas por los Estados interesados. Por consiguiente, los Estados deben estar en libertad de aceptar algunos principios y rechazar otros. Por otra parte, si el proyecto ha de ser adoptado como un tratado internacional, todas sus disposiciones serían obligatorias. Sin embargo, no puede reputarse el texto como una entidad completa, y le faltan las características de un tratado. La situación se hizo más confusa porque algunos artículos, como los artículos 2, 28 y 29, están redactados en forma condicional, mientras que otros, como los artículos 23 y 26, aparentemente tienen el carácter de normas obligatorias.

42. El arbitraje previsto en el proyecto se aparta fundamentalmente de los principios tradicionales. El arbitraje se ha basado siempre en el acuerdo voluntario, como lo corroboran la práctica internacional, las decisiones judiciales y los especialistas. Pero el proyecto, después de darlo a entender en el artículo 1, inmediatamente se contradice en el artículo 2 al introducir un elemento obligatorio. Ese artículo debería aplicarse cuando las partes están en desacuerdo sobre la existencia de una controversia. Pero en la práctica, semejante situación excluye la referencia al arbitraje. La falta de acuerdo entre las partes destruirá las bases del arbitraje. La constitución de un tribunal arbitral a petición de una sola parte es incompatible con la definición básica de arbitraje y con el principio de la igualdad soberana de los Estados. Significaría que una parte podría imponer su voluntad a la otra haciendo que entre en funciones un mecanismo para el cual no existe común acuerdo.

43. El principio del acuerdo voluntario ha sido recalcado repetidas veces. Ha sido calificado de base del arbitraje por la Corte Permanente de Arbitraje en la controversia entre Noruega y los Estados Unidos de América en 1922. Además, es un elemento fundamental de la jurisdicción internacional en general. Así lo ha reconocido la Corte Internacional de Justicia en muchos de sus fallos y lo confirma el Artículo 36 de su Estatuto. La posibilidad de crear jurisdicción mediante un procedimiento unilateral quizás fué aceptada en el caso *Mavrommatis*,⁴ pero las propuestas de la Comisión de Derecho Internacional van mucho más lejos. La Comisión no sólo justifica su precepto en la voluntad tácita de las partes, sino en la ausencia de todo acuerdo.

44. Asimismo, el proyecto tiende a destruir la línea divisoria entre el arbitraje y la jurisdicción internacional *sensu stricto*. La teoría y la práctica siempre han distinguido muy claramente entre uno y otra. El proyecto de la Comisión, en cambio, crea un nexo directo entre ellos. Introduce la posibilidad de intervención de la Corte Internacional de Justicia antes de que el tribu-

nal arbitral conozca del juicio y también en última instancia. Así, el artículo 2 autoriza a la Corte conocer en las cuestiones previas, mientras que los artículos 28, 29 y 31 invisten a la Corte de la facultad de interpretar, revisar y declarar la nulidad de las sentencias arbitrales. El artículo 28 sienta, además el principio del *ejus est interpretari cujus est condere* como ocurre con el artículo 82 de la Convención de La Haya de 1907.

45. Por último, además de estar facultada para proceder a la revisión definitiva de las sentencias arbitrales, también se autoriza a la Corte para intervenir a petición de una sola de las partes. Eso parece constituir algo así como una extensión unilateral del Artículo 36 del Estatuto de la Corte. El resultado puede ser que el procedimiento arbitral se transforme, en la práctica, en puramente judicial. Todas las etapas más importantes del procedimiento quedarán en manos de la Corte Internacional de Justicia, relegándose al tribunal arbitral a un papel secundario.

46. Por esas razones, parece imposible apoyar el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. La delegación de Polonia comparte plenamente en este respecto las opiniones expresadas por el representante del Brasil (463a. sesión). También el representante de Cuba dijo con todo acierto que la adopción del proyecto equivaldría a firmar un cheque en blanco. Desdichadamente, a pesar de ello, sugirió que se recomendara el proyecto como guía.

47. La delegación de Polonia cree su deber declarar que, habida cuenta de que infringe los principios fundamentales del acuerdo voluntario y de la igualdad soberana de los Estados, y de que confunde el arbitraje con la jurisdicción internacional, el proyecto es totalmente inadecuado tanto como proyecto o como modelo.

48. El Sr. TAMMES (Países Bajos) se refiere a la idea que inspira las enmiendas propuestas por Afganistán, México, los Países Bajos y Yugoslavia (A/C.6/L.370) al proyecto de resolución conjunto. Mucho se ha reflexionado desde que la Comisión de Derecho Internacional presentó su proyecto sobre procedimiento arbitral en 1953, como lo evidencian las observaciones presentadas por 14 gobiernos (A/2899 y Add. 1 y 2) y los debates sobre el tema en la Sexta Comisión. Por otra parte, la idea primitiva de utilizar el proyecto como base para una convención no satisface evidentemente a la mayoría, y los comentarios de la Comisión de Derecho Internacional sobre algunas cláusulas, como por ejemplo, las relativas a las partes obligatorias y optativas del proyecto, pueden exigir un nuevo examen.

49. Técnicamente, las enmiendas pueden aplicarse tanto al proyecto inicial presentado por Colombia, Cuba y los Estados Unidos de América como al proyecto revisado de las tres Potencias (A/C.6/L.369/Rev.1). Las palabras “examen final” del párrafo 3 propuesto en la segunda enmienda (A/C.6/L.370, párr. II) dejan en claro que la invitación del párrafo anterior (2) no da a entender que el examen se prolongará indefinidamente.

50. La sugestión de convocar a una conferencia internacional es lógica, aunque la cuestión no puede examinarse adecuadamente hasta que la Comisión de Derecho Internacional haya informado a la Asamblea en su duodécimo período de sesiones.

51. El Sr. SALAMANCA (Bolivia) dice que tanto en este período de sesiones de la Sexta Comisión, como durante el octavo período de sesiones, la gran mayoría

⁴ Véase: Publicaciones de la Corte Permanente de Justicia Internacional, *Collection of Advisory Opinions*, Serie A, No. 2 (Litigio sobre la concesión Mavromantis de Palestina), Editorial A. W. Sijthoff, Leyden, 1924, pág. 11.

de los representantes se ha pronunciado en contra del proyecto de convención sobre procedimiento arbitral preparado por la Comisión de Derecho Internacional. En el octavo período de sesiones, la delegación de Bolivia no votó en contra de la posibilidad de que, finalmente, el proyecto sirviera para formular un convenio multilateral. Sin duda una reiterada coincidencia de opiniones negativas crea una atmósfera desfavorable, y es dentro de esas condiciones que el proyecto emerge deformado y no se aprecia ecuanimemente su sentido y alcance.

52. El orador declara que al finalizar el debate, su delegación desea destacar muy brevemente una característica fundamental e innegable del proyecto. El texto presentado por la Comisión de Derecho Internacional comprende exclusivamente un procedimiento de arbitraje; no es pues una convención arbitral. En ninguna forma obliga a someter una disputa al arbitraje. Algo más: no indica a cuál tipo de disputa se puede aplicar la convención y cree que ésta es una omisión deliberada. Los Estados que acepten el método jurídico sugerido por la Comisión de Derecho Internacional, tienen completa libertad de utilizar o no dicho método; esto quiere decir que la autonomía de las partes no está amenazada. El representante de China ha señalado esa característica del proyecto (466a. sesión) y el orador destaca la opinión de dicho representante en apoyo de su punto de vista, porque el delegado de China estuvo presente en las deliberaciones de la Comisión de Derecho Internacional, en el curso de las cuales citó la opinión de un miembro anterior de dicha Comisión, profesor Lauterpacht.

53. Por otra parte, continúa el representante de Bolivia, es evidente que en el proyecto se intenta llenar vacíos de carácter secundario, imponiendo un mayor automatismo y sistematización con lo que evidentemente se reduce la autonomía de las partes. Aunque estos aspectos no tienen mayor importancia, es precisamente en esta parte donde el proyecto de convención ha encontrado fuertes resistencias.

54. El Sr. Salamanca agrega que uno de los elementos mas importantes en la evolución del Derecho Internacional es, sin lugar a dudas, la voluntad de los Estados y cabe destacar de paso que en los últimos tiempos las conferencias internacionales en lugar de crear una atmósfera favorable que permitiera la codificación progresiva del derecho internacional, no han producido el acuerdo necesario, que es imprescindible para llegar a un resultado positivo.

55. El representante de Bolivia señala que varios Estados de América Latina han ratificado el Pacto de Bogotá firmado en 1948, aceptando el arbitraje obligatorio. En el continente americano el arbitraje ha sido utilizado por las naciones que se independizaron de España, conjuntamente con el *uti-possidetis juris*, y ha sido un instrumento jurídico de excepcional importancia en la delimitación pacífica de las fronteras. Por estos antecedentes la delegación de Bolivia no cree que se deba ver con alarma el proyecto elaborado por el Sr. Georges Scelle. En la evolución jurídica que se produce en relación al arbitraje, el proyecto ocupa una posición intermedia entre el derecho clásico y lo acordado en Bogotá.

56. Concluye el Sr. Salamanca que su delegación es partidaria de una resolución que refleje exactamente la opinión predominante en la Comisión. Como no en-

cuentra apoyo suficiente la indicación de una conferencia hecha por el Reino Unido (462a. sesión), la delegación de Bolivia votará a favor del proyecto de resolución de las tres Potencias (A/C.6/L.369), siempre que pueda eliminarse la palabra "guía".

57. El Sr. MAURTUA (Perú) declara que, en vista de las críticas que ha provocado en todos los sectores el proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional, resulta evidente que no es aceptable. La Comisión ha ido más allá del principio del acuerdo voluntario y concebido un conjunto de normas que no armonizan fácilmente con el derecho actual o la práctica establecida. En el artículo 2, el proyecto vulnera la soberanía nacional al estipular que la cuestión previa de la existencia de la obligación de recurrir al arbitraje puede ser planteada ante la Corte Internacional de Justicia; mientras que, en especial, los artículos 5 a 8 y 10 a 13, confieren al tribunal arbitral facultades excesivas. La esencia del arbitraje es el compromiso, que ha de basarse en la voluntad de las partes, y sólo excepcionalmente puede ser redactado por el tribunal.

58. El proyecto puede criticarse también en otros aspectos; debió prestar más atención a las reservas introducidas por los gobiernos en los acuerdos de arbitraje para que el procedimiento arbitral pueda adquirir fuerza obligatoria; y algunas expresiones, como "las partes no pudieron ponerse de acuerdo..." no respetan el principio fundamental de la voluntad de las partes.

59. La Comisión de Derecho Internacional ha intentado sinceramente realizar una obra constructiva, pero ha sido demasiada ambiciosa en sus objetivos. El derecho internacional debe representar el consenso de la voluntad de los Estados. Nada se gana con introducir innovaciones difíciles de aceptar, puesto que el resultado no tendrá alcance práctico, sino que únicamente servirá para desacreditar el intento de codificar el derecho internacional.

60. Es evidente que el proyecto en su forma actual no tiene porvenir; pero tomando en consideración el interés manifiesto de todos los Estados Miembros en establecer procedimientos para el arreglo pacífico de las controversias internacionales, es conveniente que la Comisión de Derecho Internacional revise su proyecto a la luz de las críticas formuladas, teniendo siempre presente el principio de la voluntad de los Estados y la necesidad de un enfoque realista de la cuestión del arbitraje. Asimismo, podría realizarse un mayor esfuerzo para coordinar el proyecto con los acuerdos de arbitraje existentes, de suerte que no exista, por ejemplo, ninguna discrepancia entre el sistema de arbitraje de las Naciones Unidas y el de los Estados Americanos. Una vez revisado el proyecto, quizás resulte conveniente convocar a una conferencia como lo han sugerido diversas delegaciones.

61. La delegación del Perú no puede apoyar una propuesta que pide a los Estados que acepten como "guía" un instrumento que no se basa en principios reconocidos y generalmente aceptados. Tampoco puede aceptar el proyecto de resolución (A/C.6/L.369/Rev. 1), que señala a la atención de los gobiernos los artículos del proyecto para que los tengan en cuenta en sus gestiones de arbitraje. La tarea de lograr la evolución progresiva del derecho internacional no corresponde a los gobiernos, sino a las Naciones Unidas.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.